DISCURSO ALCALDE DE MEDELLÍN

ALONSO SALAZAR JARAMILLO

Primer Consejo Ciudadano de Convivencia y Seguridad

Miércoles 9 de septiembre de 2009

Auditorio Parque Biblioteca Belén

Reflexionemos sobre qué ha pasado en la ciudad, qué está pasando, qué lecturas se hacen de los que nos sucede y a qué queremos convocar a la ciudadanía.

Regresemos a 1975. Medellín era una ciudad bucólica con muy bajas tasas de homicidio, con delincuentes muy famosos pero porque eran más bien camajanes, con algunos matones que ya se hacían célebres en el barrio Antioquia como parte de un cierto folclor regional. En esa época, va emergiendo el narcotráfico. Para entender lo que significó, hay que intentar una definición de narcotráfico que lo trascienda como hecho económico y delictivo, y que lo ponga en la dimensión cultural que tiene, que para mí es lo más complejo. Porque el narcotráfico, a lo largo de los años 80 y de los 90 —y aún hoy—, terminó remplazando a izquierdas y derechas que no fueron capaces de conquistar a esas masas urbanas inconformes. En algún momento, las guerrillas, en los procesos de paz en El Popular y en Villatina, entrenaron muchachos que después dejaron sueltos, y eso propició la creación de algunas bandas; aunque estuvieron muy presentes y activas a nombre de ideologías revolucionarias en Medellín, lo que le pasó a las milicias guerrilleras fue que la cultura del narcotráfico se les trepó, y acabaron actuando igual que las bandas del narcotráfico en ese momento o igual que las bandas paramilitares en tiempos posteriores.

Desde los años ochenta empezamos un proceso de violencia implacable, creciente e implacable, con una institucionalidad absolutamente de espaldas a esas realidades que iban irrumpiendo. Desde luego, hubo personas que trabajaron arduamente para combatir ese fenómeno delictivo, como Valdemar Franklin Quintero o nuestro alcalde Peláez, pero la institucionalidad, en general, se mantuvo de espaldas, o peor: comprometida en prácticas de violación sistemática de derechos humanos (lo puedo atestiguar, pues trabajaba en esos tiempos en el barrio La Divina Providencia en El Popular) o en prácticas de corrupción, o todo mezclado al mismo tiempo. El MAS (Muerte a Secuestradores), por ejemplo, donde civiles, militares, y policías actuaban con sicarios de organizaciones, fue una de las formas de acción que diluyeron

la institucionalidad, y esto fue notorio de nuevo en los años noventa, en el enfrentamiento más radical contra el Cartel de Medellín.

Los partidos históricos perdieron influencia en esas zonas urbanas crecientes; la izquierda no tuvo capacidad de llevarlos a un proyecto ideológico, y el narcotráfico entró con toda su fuerza en esa dimensión cultural. Me refiero a *cultura* desde una dimensión social y antropológica; a la religiosidad fetichista, por ejemplo, que volvió a extenderse por todos los rincones, en un proceso bastante complejo de idolatrías cobijadas como creencias casi siempre católicas pero muy paganas; a las nociones de justicia, precarias; a la cultura campesina que se fue tomando de nuevo la ciudad.

El narcotráfico es una fuerza absolutamente conservadora, tanto que impidió que movimientos de culturas juveniles crecieran en Medellín; el narcotráfico perseguía a los rockeros, los amenazaba, y en cierta medida los jóvenes fueron forzados a uniformarse alrededor de una estética, que no es mala de por sí, pero que les fue impuesta: la estética campesina paisa.

El proceso de urbanización y secularización se detuvo, dejamos de ser una ciudad que avanzaba hacia comportamientos más urbanos, más modernos, e involucionamos de manera dramática. Todo eso lo estamos sufriendo actualmente, todavía, con una fuerza tal que lenguajes marginales de los muchachos de los barrios, de las bandas, hoy son comunes en las élites; el llamado *parlache* se fue trepando por toda la estructura social desde las zonas populares. No guardo prejuicios al respecto, pero cuando en una sociedad la muerte se nombra tan fácil y el reiterado apelativo cariñoso es *gonorrea*; cuando la palabra *parce*, que significa amistad, varía y se usa ya en el contexto de disolución de formas de relación, estamos frente a un lenguaje que desestructura y fomenta una cultura donde el valor de la vida y de la convivencia se va perdiendo de manera sustancial.

Por otro lado, los costos de la desinstitucionalización, la cadena sucesiva y costosa de remplazo de poderes ilegales por poderes ilegales, impide entronizar de manera fuerte, sustantiva, la institucionalidad y el Estado.

¿Por qué crecieron las milicias guerrilleras tan fácilmente en esta ciudad? Porque cuando, en el año 99 (¿?), llegaron algunos dirigentes de frentes rurales, en primera instancia del Eln, a formar en el barrio Popular una fuerza para facilitar esa delincuencia, las comunidades estaban agobiadas por la acción de las bandas, de Los Nachos, Los Monjes, Los Priscos o La Terraza... una terrible cadena infinita de nombres. La guerrilla creyó encontrar el camino para tener esa inmensa presencia militar en la ciudad que nunca había logrado, y se engañó con ese crecimiento, pensando que era una adhesión del pueblo a sus pensamientos, sin entender que la gente simplemente los quería como vigilantes, como alguien que instaura un mínimo orden frente al caos total que

esas bandas de narcotráfico estaban sembrando. Aunque algunas milicias se reinsertaron luego, desde el 94, muchas de ellas, muchos jefes, fueron rápidamente cooptados primero por la cultura de narcotráfico, y posteriormente por el propio narcotráfico.

Recuerdo que, en mi función de periodista, me subía a una terraza en el barrio Moravia con Lucho, uno de esos líderes, y me indicaba: “Mis dominios se extienden así”, como si fuese un principado, y en cierta forma lo era pues tenía hasta harén propio. Lucho acabó vinculado con narcotraficantes, después secuestró narcotraficantes y terminó desaparecido. Así como él, casi todos los grupos de las milicias guerrilleras sufrieron ese impacto, y el proyecto de asentar una fuerza revolucionaria en los barrios, ordenado por el comando central del Eln y posteriormente por la Farc —pues también lo intentaron—, fracasó rotundamente.

En su relevo llegó La Terraza, la banda que sucede en el poder militar a Pablo Escobar y en la que refulgen dos nombres específicos: Carlos Castaño y Don Berna. La Terraza se les sale de control y todos en esta ciudad recordamos (y sufrimos) el exterminio de parte de la banda organizado por aquellos dos hombres; en particular, la matanza ejecutada en las sabanas de Córdoba donde habían invitados a los jefes de esa banda a unas supuestas negociaciones o conversaciones. Sucede por esos años algo muy sorprendente, inédito en la historia colombiana, un hecho social complejo desde el punto de vista del análisis político. Carlos Castaño logra que toda la estructura criminal que se ha formado en la ciudad, sobre todo delincuencia común, empiece a ser catalogada como fuerza política, y lo logra un día cualquiera poniéndole a la nueva federación de bandas de esta ciudad, controlada por la llamada *Oficina*, el nombre de autodefensas. Muchos especialistas vienen a Medellín y todavía preguntan cómo era que patrullaban estas organizaciones, y se imaginan columnas similares a un ejército o a una guerrilla, una fuerza regular con fusiles ejerciendo el control, pero la complejidad del fenómeno de las autodefensas radica en que se le dio el carácter de una fuerza política, cuando en realidad nunca dejaron de ser sectores de delincuencia organizada, y esa era su manera de ser, de actuar, y de pensar. Después, cuando vino su reinserción, pudimos comprobarlo, pues nos enfrentamos no a gente con formación ideológica, sino a personas con una formación, con una socialización en la violencia muy fuerte, muy marcada.

Esas autodefensas van creciendo, se les bautiza Bloque Cacique Nutibara, aparecen en la prensa por primera vez con camuflados y con boinas, en algún rincón de la ciudad. Para aparecer así se llevaron a unos periodistas. Pero eran las mismas bandas actuando contra la presencia de guerrilla y de milicias, sólo que ahora con una coordinación.

En el 2002, la violencia repuntó muy fuerte en Medellín. El punto máximo de nuestra crisis fue entre 1990 y 1991, con la espantosa cifra de más o menos 6.500 homicidios/año; desde entonces ha ido disminuyendo esa cantidad, pero no se trata de una disminución en la tasa de violencia como una línea vertical que se va profundizando sino de una línea zigzagueante: hay avances, hay retrocesos. Uno de los retrocesos grandes fue en el 2002 y está asociado, a veces para mal, al nombre de la Comuna 13. Ese año el Estado vino a constatar, la sociedad vino a constatar, el resultado de 10 años de abandono de este sector donde habitan 140.000 personas, donde se había dejado asentar a las Farc, al Eln y a unos grupos llamados Comandos Armados del Pueblo, que tenían un poder omnímodo, tanto que, incluso, hacían filar a los niños en los colegios, al estilo de Sendero Luminoso; tenían a los maestros que querían, coherentes con sus planteamientos ideológicos; decidían cuál ONG podía o no trabajar en la zona; cuáles funcionarios del Estado podían ingresar o cuáles no. Y fueron cerrando de manera sistemática el acceso de la justicia, el acceso de la fuerza pública.

De nuevo pagamos con un altísimo precio ese descuido del Estado y la sociedad. Con la necesidad de una acción militar de la envergadura de la Operación Orión, que debe ponerse en el contexto histórico para poder entenderla, pues muchas veces quienes documentan críticas al manejo que esa operación le dio a los derechos humanos, válidas seguramente, se olvidan de documentar la situación previa: ¿Y los 10 años anteriores qué?, ¿y los líderes allá asesinados?, ¿y la violación sistemática de los derechos humanos en esos 10 años?. No podemos escribir la historia de nuestra ciudad sólo por pedacitos o seleccionando las lecturas a conveniencia. La Operación Orión, junto a la Operación Mariscal que le siguió, marcaron un quiebre importante en la disminución; el Estado retomó territorialidades que tenía pérdidas y eso determinó un descenso importante en la tasa de homicidios, hasta que entramos al último escenario, el de la negociación y la inserción.

Cuando Sergio Fajardo ganó la Alcaldía, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, a quien conocía desde hacía mucho tiempo, nos invitó a trabajar por la reinserción en la ciudad. Hoy podemos hacer varias lecturas y diferentes balances de ese proceso, pero es necesario hacer unas precisiones para entender lo que estamos viviendo hoy en la ciudad de Medellín. En primer lugar, se nos dijo que iban a ser 800 reinsertados, y también, y nos pareció bien, que ya existían compromisos formales en cuanto a recursos y plazas de empleo por parte del Alcalde de entonces. Nos bastó una mirada al proceso de reinserción que estaba diseñado, para darnos cuenta de que no había nada planeado, ni por parte del gobierno nacional ni del local, absolutamente nada: no había asignaciones presupuestales, no había recursos, ninguno de los 800 estaba diagnosticado, ni siquiera estaban plenamente identificados (nos demoramos cerca de un año y medio para tener una listas definitivas de la

reinserción). Era un proceso sin verificación, y durante mucho tiempo estuvimos exigiéndosela a las instancias nacionales correspondientes, pues aquí estaba la Comisión de Paz de Antioquia, que intentó hacer algo, pero no contaba ni con el mandato, ni con las herramientas. Y algo peor: los 800 reinsertados se convirtieron en 4.300.

Como era absurdo en esas circunstancias pedirle colaboración a algún empresario para emplear de inmediato a esas personas, empezamos un trabajo psicosocial de transformación que nos permitiera garantizar, en algún momento, que fueran aptos para la vinculación laboral. Debo decir que todavía tenemos problemas en el terreno del empleo, aunque un sector del empresariado, que pidió siempre que ésto no se registrara públicamente, llegó a acoger a un poco más de 500 reinsertados.

Sin verificación, aunque, desde luego, la prensa tenía el papel regulador. En un proceso donde no hay quién diga realmente todo lo que está pasando, las versiones de unos, de otros, las versiones de los enemigos de la desmovilización por pensamiento o por ideología, y las denuncias reales de los incumplimientos quedan sujetas a los efectos mediáticos, y esos efectos mediáticos, en general, fueron siempre desestructurantes; porque no hubo compás de espera, desde el inicio fue algo parecido a un bombardeo sistemático.

Desde la Alcaldía empezamos a señalar graves falencias. Recalcamos lo incompleto del proceso de reinserción, pues no equivalía a un asentamiento de la autoridad real del Estado. ¿Qué tanto Estado construimos mientras se iba dando la reinserción?. La respuesta no es muy clara. Tal y como está documentado y puesto a la luz pública, algunos de los testigos de hechos delictivos en que estaban involucrados dirigentes de ese proceso de reinserción, testigos que nosotros llevábamos ante la justicia, fueron asesinados; y algunos de esos dirigentes, que a su vez fueron asesinados, no fueron judicializados. El asesinato no es una noción de justicia que nuestra sociedad deba admitir como un consuelo; por el contrario, hay que investigar y judicializar y defender la vida, aún la vida de los delincuentes; y el proceso judicial, la cadena completa de judicialización, en la etapa misma de la reinserción, fue un fracaso.

Siento, como Secretario de Gobierno de ese momento, y siento como Alcalde, que hay respuestas ineludibles que el Estado no ha dado, y en gran parte se debe a que el Estado colombiano no está diseñado para que los alcaldes sean los jefes de seguridad de sus ciudades, los jefes de policía; el Estado colombiano tiene absolutamente centralizado el tema de la seguridad. No hay policías locales, no hay sistemas acusatorios locales, y por eso, con razón a veces, la ciudadanía cuestiona: "Alcalde ¿usted qué?". Pues bien, desde hace

rato estamos pidiendo aumento en el pie de fuerza —hoy, en el Valle de Aburrá, tenemos 500 policías menos que en el 2005—, y cada tanto se nos anuncia que ya llegan los refuerzos y se generan grandes titulares, y no nos cumplen. También necesitamos fiscales para cubrir 130 vacantes en la Fiscalía local.

Al final, la lectura del proceso de reinserción tiene sabores agridulces, pero me pregunto qué sería de Medellín hoy si no le ponemos el pecho a esa tarea tan impopular, tan ingrata, tan criticada. Nos propusimos resocializar la mano de obra de la guerra (no a resocializar a capos, como algunos dicen), resocializar a los muchachos que no disfrutaron de la inversión social a tiempo. Una acción tardía, pero indiscutiblemente necesaria.

Los fenómenos de violencia que seguimos viviendo deben analizarse según factores estructurales y factores coyunturales. Empecemos por los estructurales: Colombia ha dado todo, absolutamente todo, para combatir el narcotráfico; los hombres de las fuerzas armadas que han muerto en combates o erradicando cultivos ya suman miles, muchas organizaciones delictivas han sido golpeadas y desestructuradas, centenares han sido extraditados, y, sin embargo, el narcotráfico no es tiempo pasado sino tiempo presente. Una de las grandes dificultades, ya no sólo de Colombia sino de América Latina, es cómo construir gobernabilidad, cómo construir inclusión social con ese crudo fenómeno del narcotráfico al fondo. Le está pasando a los mejicanos, pasa en toda Centroamérica, pasa en una ciudad de la riqueza de Sao Pablo, donde un grupo criminal llamado Primer Comando Capital paraliza una ciudad de 20 millones de habitantes en una noche, y asesina 20 guardias penitenciarios y a 40 policías. En Caracas, tal vez la ciudad más violenta hoy en todo el continente. Tanto donde hay gobiernos de izquierda como donde hay gobiernos de derecha, el problema de la gobernabilidad de las ciudades se ha vuelto importantísimo, fundamental, está en la agenda prioritaria. Aquí vino el presidente de Méjico, y vienen delegados de muchos gobiernos, a mirar nuestras acciones, a buscar luces de esperanza en Medellín.

Muchos nos equivocamos, empezando por mí, cuando en algún momento nos inventamos unas teorías rarísimas que sostenían que las causas del fenómeno de violencia en Medellín estaban en nuestra manera de ser, en nuestras raíces culturales, porque éramos ancestralmente muy ambiciosos. Lo cierto es que Medellín fue el anticipo de lo que hoy es un drama universal, de lo que es tema de todos los gobiernos y especialmente de los grandes centros urbanos (llámese ese fenómeno *maras* como en Centroamérica, o llámense *chavos banda* como en Méjico, o *pibes chorros* como en Buenos Aires), el tema de las violencias urbanas, del gobierno de los territorios es el gran desafío de hoy. Creo que la sociedad colombiana le reconoce al presidente Álvaro Uribe Vélez los avances tan importantes en materia de seguridad, especialmente en el

debilitamiento de las estructuras de la guerrilla y en el desmonte del paramilitarismo, pero el libreto está cambiando radicalmente, de repente, y la seguridad de las ciudades se convierte en el nuevo desafío para el Estado colombiano, y para enfrentarlo no sirven los helicópteros artillados, ni los aviones de inteligencia, no nos sirve un ejército del tamaño que tenemos. Hay que empezar a reestructurar, por ejemplo, convirtiendo una buena parte de los soldados profesionales en fuerza de policía, pues si las fuerzas de la guerrilla se han reducido, ya se requieren grupos más especializados.

Sin darnos cuenta, entramos al postconflicto. Medellín no tiene hoy las fuerzas guerrilleras de antes ni tiene los grupos paramilitares de antes; no digo que no tenga criminalidad y delincuencia, sino que preciso que si lo que definía a esos grupos armados como paramilitares era que combatían a la guerrilla y que, tal y como el Estado ha tenido que reconocerlo, a veces desafortunadamente contaban con su cobertura, hoy en Medellín no tenemos grupos que sean proyección de éste, no tenemos grupos combatiendo a ninguna fuerza insurgente, y por tanto no les voy a regalar el título de grupos políticos porque son narcotraficantes y son criminales los que están hoy recorriendo la ciudad y tratando de implantar de nuevo su fuerza. No es que negarles la condición de paramilitares aminore el problema, porque son un problema gravísimo, pero llamarlos paramilitares les da una ventaja de entrada, cierto estatus que no les podemos conceder.

Podemos separar las violencias en dos: las acciones violentas asociadas a estructuras criminales y las violencias que podemos llamar, en sentido general, sociales (que alguien se emborrachó y le dio por pelear con otro, y, de pronto, desenfundó, por ejemplo). En Medellín, la correlación que entre ambas era de un 30% de violencia estructural y un 70% de violencia social, se invirtió totalmente: hoy el 70%, o tal vez más, es violencia producida por la lucha de grupos organizados por el control de fenómenos delictivos, de espacios propicios para la delincuencia, y el 30% es violencia social. La violencia social se ataca con educación, con pedagogía, con controles; la violencia de estructuras criminales hay que atacarla con policía judicial, hay que aplicarle la judicialización. Colombia hace poco instauró el sistema penal acusatorio, un sistema muy garantista en el tema judicial, pero el país no se preparó para el cambio en el sistema penal; se les dieron todas las garantías a los ciudadanos, pero apenas estamos viendo cómo perfeccionamos la policía judicial; dependemos altísimamente del testimonio, no tenemos la capacidad suficiente para aportar las pruebas científicas que el sistema penal demanda; todavía no tenemos un verdadero laboratorio de criminalística, y los investigadores hacen esfuerzos extraordinarios, pero sin las herramientas adecuadas.

¿Por qué el 70% de la violencia obedece a la criminalidad organizada? Porque, por primera vez en muchos años, se rompió una estructura hegemónica que

tenía el control de la delincuencia en la ciudad. Pero, cuidado, enfatizo, el control de la delincuencia en la ciudad, no el de Medellín, pues decir que tenían el control de Medellín va más allá de reconocer los problemas y le da injustamente a esos grupos un poder que no han tenido. Se rompió esa estructura que hegemonizaba el mundo criminal, que hacía que cualquier delincuente en cualquier parte tuviera que tributarle a la llamada *Oficina*. Por primera vez, esa estructura tuvo nombres propios, pues hasta ese momento era una organización fantasma; por primera vez hay capturados de su élite y de las estructuras medias, y a raíz de eso advertimos que la lucha contra esta estructura sumaría positivamente, pero, por otro lado, traería incremento de homicidios como factor negativo. Una consecuencia no deseable pero esperada.

Actualmente, esos grupos intentan reacomodarse, han perdido mucha capacidad de acción y mucho del control sobre la criminalidad. Ciertas confrontaciones en el territorio han ido mostrando autonomía, algunos grupos siguen dependiendo de estructuras, pero otro tanto ya no actúa bajo una relación tan vertical y tan orgánica, y están sueltos y envueltos en disputas.

Analizando lo anterior, planteamos la estrategia de convivencia y seguridad para Medellín, que se funda en varios componentes. En primer lugar, la movilización social. Y sea la ocasión para recordar la época en que el presidente Gaviria creó la Consejería Presidencial para Medellín, y nombró a María Emma Mejía, que, visto desde hoy, hizo movilización social, aunque no la llamáramos así, pues en los foros denominados *Alternativas de Futuro* sentó a empresarios, gremios, alcaldes, líderes barriales, académicos. La iglesia también empezó a dar un viraje extraordinario, recuerdo que convocó a una inmensa marcha por la vida por allá en el 93. Y también las ONG, y los artistas, y la educación empezó a multiplicar el mensaje de la Constitución del 91 en los valores de la vida, de la democracia, de la participación. Y los medios de comunicación, especialmente con el programa *Arriba mi Barrio*. Por esos días, la sociedad medellinense inició un proceso de reconstrucción que es lo que hoy admiran quienes vienen a decir *aquí qué pasó, cómo hicieron para salir de ese túnel oscuro*.

Tenemos que tonificar esta movilización social, que todavía existe. Quizás lo que está pasando nos obliga, a nosotros en primera instancia, como gobernantes, pero a la vez a toda a la sociedad, a revisar la coherencia de nuestros procesos de formación. Todos sabemos que hay unos procesos primarios de socialización, donde la familia es irremplazable. Tenemos que trabajar duramente por reconstituir ese núcleo primario, en el que la fusión de los credos religiosos con el trabajo en el sistema educativo, pero también con los partidos y con las instituciones, fue importante. Voy a rememorar algo, que no es exactamente lo que queremos hoy en día, pero es un buen ejemplo, muy

bellamente documentado por don Nicanor Restrepo Santamaría, cuando la élite antioqueña se preocupaba por formar en su conciencia de ese tiempo a los ciudadanos en valores cristianos, religiosos, a través de los patronatos y estimulaban la organización de los trabajadores. Hoy yo creo que tenemos una élite, como la de don Juan Luis Mejía, un poco más laica; no serán patronatos propiamente, pero yo creo que no podemos quedarnos -y lo hago cómo una auto reflexión- sólo desarrollando obras sociales en el sentido de la infraestructura que estamos construyendo, sino que me da la sensación de que le hemos bajado el tono al tema de la formación, de la insistencia de la vida, de los valores cohesionantes de la sociedad, y eso tiene que ser lo natural.

La seguridad no nos va a surgir sólo porque el Coronel Martínez sea un patrullero del tamaño que es. La seguridad sólo llega como fruto de una sociedad conviviente, de una sociedad dónde los valores son intrínsecos, digamos genéticos, en el sentido de que vienen desde la cuna. Lo que el Estado tiene que hacer es reforzar esa formación. Necesitamos todas esas socializaciones primarias en pleno funcionamiento.

Ahora, en el momento de crisis, le estoy pidiendo a los padres y madres, a los vecinos y amigos de esos *pelaos*, que los traigan, para que no tengan la disculpa de que esta ciudad no tiene oportunidades.

Ya pusimos la Oficina de las Oportunidades, que nos los lleven a ver qué hay que hacer, si quieren ir a educarse, si quieren el tema de empleo, si quieren vincularse a los programas del Municipio... el Municipio de Medellín tiene 87 programas para la juventud, en sólo Secretaría de Cultura, que beneficia grandemente al sector juvenil. Nosotros tenemos un presupuesto mayor que el del Ministerio de Cultura de Colombia: para *Altavoz* y para el *hip hop*, y para las redes de bandas. Y tenemos el Fondo EPM, para la educación superior, y el programa Jóvenes con Futuro y el programa Guías Ciudadanos, y ahora el programa de Fuerza Joven. Y ese paquete de oportunidades está ahí con números exactos: 1.000 cupos de jóvenes ciudadanos, 500 de Fuerza Joven, 500 de Guías Ciudadanos... Jóvenes con Futuro, Clubes Juveniles. Allá está la Oficina de las Oportunidades, para que no se quede en discurso.

La muerte no tiene justificación jamás por ninguna razón socioeconómica. Nosotros tenemos que quitarle cualquier razón, cualquier legitimación por condiciones sociales, a la muerte. El Chocó y el Pacífico, las zonas más pobres de Colombia, no han sido la más violentas, sufren la violencia sólo después de que desde el interior del país se la llevamos. El discurso de que la pobreza guarda relaciones automáticas con los procesos de violencia nos ha hecho mucho daño, lo mismo que afirmar que mientras no se superen determinados problemas sociales no se va a superar la violencia. Hay que decir

exactamente lo contrario: para superar los agudos problemas sociales, tenemos que empezar a superar los problemas de violencia.

Hemos nombrado recientemente a Juan Felipe Palau, que también viene de esta camada vieja, para dirigir esta parte del proceso de resocialización, y vamos a meterle acompañamiento de familias y acompañamiento de líderes. En cada zona, los muchachos que participen en el programa tendrán las tutorías de sus padres, y si no tienen padres por cualquier razón, de una persona cercana; pero también de párrocos u otros líderes religiosos que nos quieran acompañar, y líderes cívicos. Para que esta oportunidad que se les da no la desperdicien, y no nos hagan quedar mal ante la sociedad cuando dicen que es que estamos apoyando a muchachos que siguen delinquiriendo. Vamos a vigilarlos muy estrictamente, pero les vamos a ofrecer una oportunidad real, no a quienes sean jefes de estructuras criminales; a los muchachos de barrio. Y en este momento hay cinco equipos del Municipio de Medellín, cada uno liderado por un Secretario, que está en terreno buscando que estos grupos se sienten, que paren la confrontación, y diciéndoles “aquí está esta oferta social”.

Yo me reuní personalmente con los muchachos de Las Independencias -de eso hace 15 días, y llevan 15 días juiciosos-, y vamos a estar trabajando con ellos sistemáticamente. El Coronel Martínez y el Secretario se sentaron con unos grupos de Aures, ya se sentaron con otro grupo de Manrique y otros grupos del Doce de Octubre; todo mundo está aquí haciendo su trabajo. El Secretario bautizó eso “diplomacia de calle”, pero el proceso es muy claro en el sentido de decir “hay una oportunidad, no puede haber impunidad”. No se pueden detener procesos judiciales, no se puede detener la acción de la justicia; al contrario, vamos a trabajar cada vez más en eso, y ese es el tercer componente: todo lo que es operatividad y justicia. El trabajo que estamos haciendo con la Policía es arduo, tonificándola, motivándola, mejorando la actitud, pues el propio diagnóstico que hizo el Coronel era que sentía relajada a mucha gente de su cuerpo policial. Hay que crearles estímulos, hay que acompañarlos en terreno. Yo voy a seguir insistiendo en el tema de la Fiscalía, pues necesitamos que nos den más apoyos con fiscales. Y, desde luego, continuar con la sana polémica que tenemos con la Judicatura sobre el tema de jueces y justicia. Yo creo que también tenemos que seguirla planteando, para que la impunidad ceda. Si la impunidad no cede, es muy complejo construir convivencia.

Eso era lo que quería describirles, lo que quería plantearles, invitarlos a que renueven su compromiso, porque aquí yo no veo sino gente comprometida. Invitarlos a renovarlo, desde el Picacho arriba con Juan Carlos, hasta las partes más altas del Poblado, y convertir todo en un espacio de formación. Yo creo que las empresas pueden tener un espacio y un momento para la formación, las oficinas; yo creo que en nuestra factura de servicios públicos podemos incluir elementos de formación; y, desde luego, esto es natural al sistema

escolar y a las religiones, este tema de la formación para mí es el sustancial y el del largo plazo. Los otros factores coyunturales vamos a atenderlos como urgencias, con medidas muy rápidas, pero al final lo que necesitamos es una sociedad toda movilizadada y con los valores compartidos de la democracia y de vida, como lo esencial y lo natural, no como algo extraño, sino como lo es el pan de cada día...

Muchas Gracias.